JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D. C. quince de noviembre de dos mil veintitrés

REF	Tutela
RAD	1100131030272023062900
De	Henry Ignacio Pineda Pachecho
Vs	Coopefuac, Juzg. 79 Civil Mpal y Colpensiones
ASUNTO	Sentencia

Procede el Despacho a emitir fallo de primera instancia, dentro de la presente actuación, teniendo en cuenta lo siguiente:

Manifiesta el accionante Henry Ignacio Pineda Pacheco, en sus hechos que firmó, el 31 de marzo de 2020, crédito con la Cooperativa de Profesores y Empleados de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia - COOPEFUAC - por \$14.150.953, garantizado con pagare, por circunstancias de salud se atrasó con los pagos y la cooperativa inició proceso ejecutivo, a partir del 1º de octubre de 2021 procedió a efectuar los pagos respectivos. El 19 de mayo de 2022 se realizó arreglo extraprocesal que daría fin al proceso.

El 8 de mayo de 2023, Colpensiones embarga el 30% de la mesada pensional atendiendo lo solicitado por el Juzgado 79 Civil Municipal dentro del proceso con radicado 2023-5680770, el 10 de agosto de 2023 solicitó al Juzgado el levantamiento de las medidas cautelares con base en la actualización del crédito y concepto de perito experto en materia de crédito y proyección financiera.

Y en memorial allegado el 14 de noviembre señala que el representante legal expidió certificación de los pagos por valor de \$11'736.000 quedando un saldo de \$7'040.772. el arreglo del 19 de mayo con la abogada fue por la suma de \$12.306.220 para indicar que el perito experto contratado certificó que adeudada la suma de \$5'041.166,17 incluidos intereses.

Por lo anterior, solicita se ampare el derecho al debido proceso, mínimo vital y a la salud.

En respuesta a los hechos en virtud de la notificación realizada a los accionados del auto admisorio respondieron lo siguiente:

COOPEFUAC a través de su representante legal señor José Luis Rincón González, indicó que instauraron demanda ejecutiva en agosto de 2020, correspondiéndole al Juzgado 79 Civil Municipal de Bogotá actualmente 61 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, radicado 2020-607, el 16 de mayo de 2022 se libra orden de pago y embargo de la pensión del 30%.

Manifiesta que realizaron acuerdo extraprocesal para la cual debía a esa fecha la suma de \$10'701. 061.00, comprometiéndose el señor Henry Pineda, a pagar sumas de \$500.000.00.

El 29 de junio se notificó del auto de apremio presentó excepciones y no volvió a realizar abonos.

El proceso se encuentra al Despacho desde el 11 de julio de 2023. Y finaliza indicando que la Cooperativa no ha pretendido conculcar los derechos fundamentales del señor Ignacio Pineda

Se recibió correo del Juzgado 79 Civil Municipal, pero de los datos adjuntos se observa que son los mismos anexos que allegó Coopefuac, como se puede constatar en el consec.012, es decir, no hay respuesta en sí, ni documentos ni link del mencionado Juzgado que pueda evidenciar este Despacho el trámite dado al proceso que cursa contra el señor Henry Pineda instaurado por Copefuac.

14/11/23, 10:01

Correo: Juzgado 27 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. - Outlook

RV: RESPUESTA A TUTELA No. 11001310302720230062900 DE HENRY IGNACIO PINEDA CONTRA COOPEFUAC

Juzgado 79 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl79bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 14/11/2023 10:00 AM

Para: Juzgado 27 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (989 KB)

CONTESTACION TUTELA EN CONTRA DE COOPEFUAC - DE HENRY IGNACIO PINEDA.pdf; CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL COOPEFUAC.pdf; Respuesta Henry Ignacio Pineda Pacheco.pdf;

**JUZGADO SETENTA Y NUEVE CIVIL MUNICIPAL BOGOTÁ D.C.
(Transformado transitoriamente en el Juzgado 61 de Pequeñas Causas
y Competencias Múltiples – Acuerdo PCSA 18-11127)
Calle 12 N° 9-55, piso 4º, Interior 1, Complejo Kaysser Tel: 601 2828956
cmpl79bt@cendoj.ramajudicial.gov.co**

Se remite para lo de su competencia.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela es el mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Este mecanismo de protección de los derechos fundamentales ha permitido entre nosotros afirmar el carácter vinculante de la Carta Política y ha dotado a todas las personas de un verdadero resorte institucional que les permite acudir ante los jueces para exigir el respeto de tales derechos. (artículo 86 de la Carta Política)

A pesar de que la Carta Política indica expresamente que la acción de tutela procede “por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” susceptible de vulnerar o amenazar derechos fundamentales, en algunos ámbitos se ha cuestionado su procedencia

contra sentencias, no obstante tratarse de actos emanados de jueces y tribunales en tanto autoridades públicas y la consecuente posibilidad, aunque sumamente excepcional, de que a través de tales actos se vulneren o amenacen derechos fundamentales.

Según el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esa previsión corresponde al requisito de subsidiariedad que descarta la utilización de la tutela como vía preferente para el restablecimiento de los derechos.

Sobre el carácter subsidiario de la acción, la Corte ha señalado que “*permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos*”¹. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos ordinarios con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos y que impide el uso indebido de la acción como vía preferente o instancia adicional de protección.

En consecuencia, en el análisis de la viabilidad de la solicitud de amparo, corresponde al juez constitucional determinar el cumplimiento de ese requisito, frente al cual, conviene resaltarlo, se previeron dos excepciones, en las que la existencia de otros mecanismos no frustra el ejercicio de la tutela. La primera, establecida en el mismo precepto de la Carta Política, permite acudir a la acción como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; y de otro lado, en consonancia con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, cuando se advierta que las vías ordinarias al alcance del afectado resultan ineficaces para la protección del derecho.

La primera hipótesis, en la que el propósito no es otro que evitar una afectación inminente o grave a un derecho fundamental, la protección es temporal, tal y como lo dispone el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991: “[e]n el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado”.²

El requisito de subsidiariedad exige que la persona que ejerce la acción de tutela, como mecanismo transitorio, de cuenta de: (i) una afectación *inminente* del derecho - elemento temporal respecto al daño-; (ii) la *urgencia* de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la *gravedad* del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter *impostergable* de las medidas para la efectiva protección de los derechos en riesgo³.

Ahora, referente a la idoneidad del medio de defensa judicial al alcance del afectado,

¹ Sent T 580 de 26 de julio de 2006

² Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01.

³ Sentencias: T-225 de 1993

se tiene que ésta no puede determinarse en abstracto, sino que, por el contrario, la aptitud para la efectiva protección del derecho debe evaluarse en el contexto concreto. Claro es, que la sola constatación de la existencia de una vía ordinaria no basta para descartar la prosperidad de la acción de tutela, se requiere, además, que se establezca que aquélla, de cara a los derechos involucrados y a la situación particular que se analiza, es idónea y suficiente para brindar la protección requerida.

Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, existe una diversidad de mecanismos de defensa para salvaguardar los derechos crediticios (competencia asignada a la jurisdicción civil), para la cual acudió Coopefuac – accionada - instaurando el respectivo proceso ante los jueces civiles municipales.

De ahí que, la Corte Constitucional ha manifestado la improcedencia general de la acción de tutela para resolver controversias frente decisiones de los jueces, que cuentan con su propio espacio ante los Jueces a quienes el legislador les ha encomendado conocer de aquella clase de asuntos, porque para aquellas controversias suscitadas sobre créditos adquiridos, como es el caso traído a estudio, el legislador tiene previsto que ellos han de ser solucionados en los procesos que la ley ha otorgado para ello.

En el presente caso se observa que el accionante pretende a través de la presente acción constitucional se le resuelva la controversia que se generó con el crédito otorgado por Coopefuac, conflicto que se viene tramitando en el Juzgado 79 Civil Municipal actualmente 61 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple.

Circunstancias, que debe indicarse que la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates legales. Según la jurisprudencia constitucional, *“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”*.

Así las cosas, y según lo informado por el accionado el proceso Ejecutivo con radicado N° 2020-607, después de notificado del auto de apremio formuló el señor Henry Pineda excepciones de mérito, encontrándose en la espera de que se resuelva lo pertinente, encontrándose al Despacho desde julio de 2023, en espera de la decisión que debe tomar el Juez 61 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple.

En ese orden de ideas, corresponde a los funcionarios judiciales o demás personas que administran justicia, atender los términos procesales fijados por el legislador en normas de carácter público e implementar las medidas tendientes a lograr su cumplimiento.

Así, que se afecta el derecho al debido proceso, por la falta del pronunciamiento del Juzgado, cuando se está ante un caso en el que puede materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables, atendiendo que se encuentra igualmente embargado el 30% de la pensión.

Por lo tanto, la mora judicial constituye una barrera para el goce efectivo del derecho del debido proceso. Sin embargo, se ha reconocido que este fenómeno es producto de diferentes causas, como ocurre en aquellos casos donde el funcionario tiene a cargo un número elevado de procesos, los cuales superan las condiciones estructurales del mismo y, por consiguiente, dificulta evacuarlos en tiempo.

Al respecto, la Corte ha resaltado que la mora judicial es injustificada cuando: *i) se incumplen los términos procesales para adelantar una actuación judicial; ii) no hay un motivo o razón que explique la demora; y iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial*⁴.

En diferentes sentencias la Corte ha desarrollado unos supuestos en los que a pesar de la diligencia del funcionario se genera mora judicial⁵, por ejemplo cuando: *i) la complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al término previsto por el legislador; ii) existen problemas estructurales que generan congestión y excesiva carga laboral; o iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las actuaciones judiciales con sujeción a los términos*.⁶

Ahora bien, frente a la problemática descrita le corresponde a la autoridad judicial, en virtud del valor constitucional de la justicia y el deber que le asiste a las entidades que la administran de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales (art. 2º de la Constitución).

Así las cosas, y en virtud de la demora en el trámite procesal del expediente señalado inicialmente conforme a los hechos expuestos por el apoderado del accionante, se procederá a conceder solo el derecho constitucional al debido proceso, ordenando al Juzgado 61 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple a resolver lo que en derecho corresponda sobre el proceso Ejecutivo Rad. 2020-607, en atención a que se encuentra al Despacho desde Julio de 2023.

Baste lo anterior para que el JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO de Bogotá, administrando justicia en nombre del Republica de Colombia, y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Primero: **CONCEDER** el amparo constitucional al debido proceso solicitado por el accionante HENRY IGNACIO PINEDA PACHECO, conforme lo antes indicado.

Segundo: En consecuencia, **ORDENAR** al JUZGADO 61 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE de la ciudad, que en el término de 48 horas contados a partir de la notificación de este fallo, proceda a dar el impulso que corresponda al proceso del radicado 2020-607, la cual debe informar a este despacho del cumplimiento.

Tercero: **NOTIFÍQUESE** a las partes, por el medio más expedito la presente decisión, no sin antes hacerles saber que la misma podrá ser impugnada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de la correspondiente notificación.

⁴ Sentencia T-346 de 2018.

⁵ T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001 y T-1226 de 2001.

⁶ T-1226 de 2001.

Cuarto: **SI NO FUERE IMPUGNADA**, envíese el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. Una vez el expediente de tutela regrese, si el mismo no fue seleccionado por la Corte Constitucional para su eventual revisión. Regresadas las actuaciones, se dispone el archivo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS

Firmado Por:

Maria Eugenia Fajardo Casallas

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 027 Escritural

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **15f167859dd3447ce799c324adb9a47d32611069802a9e3b0754edc35cf7c895**

Documento generado en 15/11/2023 09:58:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>